



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Dirección General de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SANIDAD

INFORME PARA LA CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA CON LA MERCANTIL SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L.U., DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

Antecedentes

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud calificó oficialmente al brote de infecciones por SARS-CoV-2 y la enfermedad denominada COVID-19 como una pandemia global.

Con el objeto hacer frente a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 y de conformidad con lo previsto en el artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio en relación con el artículo 116.2 de la Constitución, el Gobierno mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo acordado en Consejo de Ministros declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional.

Las medidas contenidas en el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en los sucesivos reales decretos de prórroga del estado de alarma y en las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones dictadas por los Ministros designados como autoridades competentes delegadas han constituido el marco regulador básico para hacer frente a la emergencia provocada por la pandemia durante su vigencia.

Una vez que dicho estado de alarma decayó resulta de aplicación en todo el territorio nacional el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En el ejercicio de su responsabilidad como autoridad sanitaria la Consejería de Sanidad ha establecido una serie de medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID-19, principalmente recogidas, aunque no exclusivamente, en la Orden 688/2020, de 19 de junio y sus posteriores modificaciones, dictada al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, el artículo veintiséis.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, el artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y el artículo 55.1 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Dentro de estas medidas preventivas se recogen una serie de limitaciones al ejercicio de determinadas actividades que afectan a la práctica totalidad de la actividad social y



La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código seguro de verificación:

económica y cuya observancia se configura como una obligación para sus destinatarios, de tal manera que su eventual incumplimiento puede derivar en el correspondiente expediente sancionador.

En este sentido, el apartado sexto de la Orden 668/2020, de 19 de junio, dispone que *“La incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores corresponderá a la autoridad municipal o autonómica competente por razón de la actividad, establecimiento, local, instalación, recinto, espacio de uso público o vía pública en los que se cometa la infracción”*.

A partir del mes de septiembre de 2020, ante la evolución de la epidemia en la Comunidad de Madrid en aquel momento, la Consejería de Sanidad adoptó nuevas medidas de mayor intensidad que implican restricciones específicas y temporales en aquellos núcleos de población o zonas básicas de salud en las que la enfermedad tiene una mayor incidencia.

Dentro de esa estrategia, en la actualidad se mantiene en vigor la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, modificada en sucesivas ocasiones, que establece con carácter temporal y excepcional determinadas medidas adicionales específicas de contención y prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ante su evolución en determinados núcleos de población.

Mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (B.O.E. nº 282, de 25 de octubre), acordado en Consejo de Ministros, se ha declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, siendo prorrogado hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021 mediante Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre (B.O.E. nº 291, de 4 de noviembre).

En dicho Real Decreto se establecen una serie de medidas y limitaciones a la libre circulación de personas en horario nocturno, a la entrada y salida de determinados ámbitos territoriales, a la permanencia en grupos de personas en espacios públicos y privados y a la permanencia en lugares de culto.

En virtud de lo previsto en el artículo 2 del citado Real Decreto en cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la autoridad competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía, en los términos establecidos en el real decreto quedando habilitados para dictar, por delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11.

En uso de dicha habilitación se han dictado varios decretos por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, en su calidad de autoridad competente delegada, estableciendo medidas para hacer frente a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, pudiendo citarse como más relevantes el Decreto 29/2020, de 26 de octubre, el Decreto 30/2020, de 29 de octubre, el Decreto 34/2020, de 23 de noviembre, el Decreto 42/2020, de 18 de diciembre, el Decreto 3/2021, de 15 de enero, el Decreto 4/2021, de 22 de enero, el Decreto 5/2021, de 5 de febrero, el Decreto 7/2021, de 12 de febrero y el Decreto 9/2021, de 26 de febrero.



Este marco normativo, en continua adaptación en función de las exigencias que derivan de la gestión de la crisis sanitaria, determina la existencia de una gran cantidad de limitaciones y restricciones temporales al desarrollo y ejercicio de determinadas actividades, tanto económicas como de la vida cotidiana, amparadas en la protección de un bien superior de relevancia constitucional como es el derecho a la salud de la población en su conjunto.

La intensidad de estas medidas se ha incrementado en los últimos meses, lo que unido a la prolongada duración de la situación de emergencia sanitaria, implica que las autoridades competentes de velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas para prevenir la propagación del COVID-19, vienen detectando numerosos incumplimientos a las mismas y que derivan, en ocasiones, en la necesidad de ejercer la potestad sancionadora por parte de los órganos que la tengan atribuida en razón de la materia.

Desde que decayó en la Comunidad de Madrid el estado de alarma declarado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la competencia sancionadora en este ámbito se ejerce por los órganos establecidos en el artículo 146 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, los servicios de inspección municipales y autonómicos, en sus respectivos ámbitos competenciales según el sector de actividad de que se trate, junto con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las diferentes Policías Locales son los encargados de vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas como consecuencia de la emergencia sanitaria.

Una vez que los Agentes de la autoridad detectan un incumplimiento de las medidas preventivas, y tras la cumplimentación del pertinente Boletín/Acta de Denuncia, se remiten las actuaciones a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad en caso de entender que son competencia de la administración autonómica, dado que dicha Dirección General es el órgano competente para el ejercicio de la competencia sancionadora en esta materia de conformidad con lo establecido en el artículo 11 v) del Decreto 307/2019, de 26 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad.

Una vez recibida la denuncia en la Dirección General de Salud Pública se procede a su comprobación, clasificación y valoración con el objeto de determinar si procede o no la incoación de expediente sancionador. Estas tareas resultan imprescindibles dado que las denuncias que se están recibiendo provienen desde múltiples lugares de emisión (Ayuntamientos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policías Locales, otros Agentes de Autoridad de distintos ámbitos sectoriales como Agentes Forestales, Servicios de Inspección, etc...) y por diferentes canales y soportes (en un importante porcentaje se trata de documentos manuscritos lo que dificulta o ralentiza su comprobación y clasificación).

En caso de que la Dirección General de Salud Pública, como órgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora en la materia, considere que procede la incoación formal de expediente por la conducta denunciada se envían las actuaciones a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad proponiendo la incoación y tramitación del



oportuno procedimiento sancionador conforme a las competencias atribuidas en el artículo 13 h) del citado Decreto 307/2019, de 26 de noviembre.

En la Secretaría General Técnica, como órgano encargado de la tramitación de los expedientes sancionadores de la Consejería de Sanidad, se impulsa e instruye el expediente en sus diferentes fases de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Ley 40/2015, de 1 de octubre y el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, en todo lo que no se oponga a los anteriores y, tras ello, se elevan las actuaciones al órgano competente para resolver conforme a las competencias atribuidas por el artículo 146 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (la titular de la Dirección General de Salud Pública para la imposición de sanciones por infracciones leves y graves –hasta 15.025,30 euros–, el titular de la Consejería de Sanidad para las sanciones muy graves desde 15.025,30 hasta 120.202,42 euros y el Consejo de Gobierno para sanciones muy graves desde 120.202,43 hasta 601.012,11 euros).

Impacto de las denuncias por incumplimientos en materia de medidas sanitarias establecidas para la prevención de la transmisión del COVID-19

Las unidades administrativas de la Dirección General de Salud Pública y de la Secretaría General Técnica que participan en las diferentes fases de la tramitación de las denuncias y los ulteriores procedimientos sancionadores derivados del incumplimiento de las medidas sanitarias anti COVID-19, no se encuentran dimensionadas en efectivos y recursos para poder asumir el incremento de la carga de trabajo que implica tramitar, en el periodo de tiempo que impone la institución legal de la prescripción de las infracciones, el elevado volumen de denuncias que se están recibiendo como consecuencia de los incumplimientos de las medidas de prevención frente al COVID que se están detectando en todo el territorio de la Comunidad de Madrid.

El impacto observado de las denuncias recibidas en la Dirección General de Salud Pública en las últimas fechas y los consecuentes expedientes sancionadores derivados de los incumplimientos de las medidas sanitarias frente al COVID supone un continuo aumento de carácter exponencial y una sobrecarga de trabajo sobrevenida, coyuntural y temporal que excede del dimensionamiento actual de las estructuras de la Consejería de Sanidad, tanto en medios humanos como materiales, para poder ser absorbida y desarrollada con la necesaria efectividad.

Para ponderar la situación generada se puede traer a colación que, a fecha 5 de marzo de 2021, en la Dirección General de Salud Pública constan recepcionadas más de 40.000 denuncias exclusivamente relacionadas con diferentes incumplimientos de medidas COVID, encontrándose pendientes de ser clasificadas y valoradas.

El principal incumplimiento objeto de denuncia lo constituye la inobservancia del uso de mascarilla, pudiendo cifrarse aproximadamente en el 60-65% del total, seguidos de la participación en grupos en un número mayor del permitido, el incumplimiento de la entrada o salida de núcleos de población restringidos, la estancia en vía pública sin causa justificada



en horario en que la libertad de circulación se encuentra limitada y los incumplimientos de horarios o aforo en determinados establecimientos.

La mayoría de las infracciones objeto de denuncia son constitutivas de infracciones sanitarias calificadas como leves y, en particular, el incumplimiento mayoritario (mascarilla) se sanciona con multa de 100 euros en virtud de lo previsto en el artículo 31.2 del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio.

El crecimiento de las denuncias recibidas a largo del año 2021 como consecuencia de los incumplimientos de las medidas sanitarias para prevenir la emergencia COVID guarda relación directa con el endurecimiento de las mismas atendiendo a la situación epidemiológica de cada momento y su prolongación en el tiempo, que ha motivado un elevado aumento de la inobservancia de las mismas.

Por otro lado, los plazos de caducidad procedimental y de prescripción de las infracciones que son parte inherente del régimen administrativo sancionador de nuestro ordenamiento, determinan la imperiosa necesidad de tratar, clasificar y valorar las denuncias recibidas y, en su caso, incoar el oportuno expediente para deducir responsabilidades administrativas, con una celeridad que permita cumplir los referidos plazos legalmente establecidos, hecho que puede comprometerse debido a la gran cantidad de denuncias recibidas en las últimas fechas, algunas de las cuales se encuentran cercanas a cumplir los plazos de caducidad de acción o de prescripción de las infracciones.

A ello debe añadirse que también resulta necesario una actuación ágil para corregir las conductas infractoras a la mayor brevedad y así, por un lado, prevenir comportamientos indeseables que pueden suponer un riesgo para la salud pública y, por otro, fomentar la observancia y adhesión al cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención.

Conforme a lo expuesto con anterioridad resulta posible anticipar que, debido al aumento de las denuncias recibidas en la Dirección General de Salud Pública desde diferentes ámbitos y cuerpos policiales (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policías Locales...) como consecuencia de incumplimientos de las medidas preventivas frente al COVID en nuestra región, tanto su clasificación y evaluación, como la gestión de los expedientes sancionadores que pudieran derivarse de las mismas, no van a poder ser asumidos con la necesaria celeridad por las unidades administrativas de la Dirección General de Salud Pública y de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad encargadas de su tramitación, al tratarse de un ámbito de actuación novedoso y sobrevenido que excede con creces del dimensionamiento de dichas unidades para las funciones que, con carácter ordinario, realizaban antes de la pandemia.

En este sentido cabe advertir que el número total de expedientes sancionadores totales incoados por la Consejería de Sanidad en el ejercicio 2019 (el último año completo prepandemia) fue de aproximadamente 1.452, lo que permite corroborar la dificultad que las mismas estructuras administrativas puedan asumir la carga de trabajo adicional y sobrevenida que implica el elevado volumen de denuncias recibidas por incumplimientos de las medidas sanitarias preventivas frente al COVID-19.



A ello debe añadirse que la carga de trabajo ordinario de estas unidades (al margen de la adicionada por el incumplimiento de las medidas COVID) no ha disminuido en los últimos meses sino que, por el contrario, ha aumentado como consecuencia de otros aspectos derivados de la actual crisis sanitaria.

En cualquier caso no debe olvidarse que las denuncias motivadas por los incumplimientos de las medidas sanitarias para prevenir el COVID se caracterizan por su carácter coyuntural y temporal, de tal manera que se trata de una carga laboral adicional que desaparecerá cuando la emergencia sanitaria finalice (hecho que es previsible a medida que la situación sanitaria mejore según avanza la campaña de vacunación).

La tramitación de las denuncias en esta materia y la incoación de expedientes sancionadores cuando sea preciso, constituyen una pieza importante de la estrategia global para atajar la emergencia sanitaria causada por el COVID y, por tanto, tiene una incidencia directa en la salud pública y en la prevención de eventuales riesgos para la misma, al ser un instrumento que permite corregir aquellas conductas individuales que determinan una inobservancia de las medidas adoptadas en aras de proteger la salud pública.

La contención de la pandemia exige de los poderes públicos cumplir con su deber constitucional de «organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios» establecido en el artículo 43.2 de la Carta Magna, para garantizar el derecho a la protección de la salud que reconoce este artículo en su primer apartado.

En este sentido, el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 señala que:

“1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia. (...)”

Para lograr el objetivo anteriormente expuesto se propone la contratación de un servicio de apoyo, colaboración y asistencia técnica para la clasificación de denuncias y la gestión de los procedimientos sancionadores derivados de incumplimientos de la normativa sanitaria frente al COVID-19, que debe hacerse con la mayor urgencia, dado que resulta crítico tramitar las denuncias recibidas desde diferentes cuerpos policiales y de inspección e iniciar, cuando sea preciso, los oportunos expedientes sancionadores con la mayor celeridad posible.



Precisamente la necesidad de actuar con rapidez en esta materia, unido al carácter coyuntural y temporal de esta clase de denuncias dado que desaparecerán en un futuro próximo cuando concluya la actual emergencia sanitaria, determina la necesidad de contratar la gestión de determinadas tareas de apoyo a una empresa externa con adecuada solvencia y experiencia en la materia y que asuma los costes de personal, de instalaciones y de medios materiales necesarios para mejorar la gestión de estos procedimientos por el tiempo imprescindible para ello.

Además, se evita el componente antieconómico que supondría a la Administración tener que hacer frente a los costes que implicaría la contratación de personal para realizar estas tareas, alquiler de inmuebles para su ubicación, gastos de suministros y mobiliario así como la provisión de medios informáticos y materiales de oficina adecuados para realizar dichas tareas cuando las mismas tienen una naturaleza eminentemente temporal y no estructural, esto es, sin vocación de permanencia.

Con ello se mejorará y fomentará la necesaria prevención de eventuales riesgos para la salud pública al agilizarse la rápida corrección administrativa de los comportamientos individuales que determinan una inobservancia de las medidas sanitarias adoptadas para prevenir la propagación de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, y, con ello, aumentará la adhesión y observancia del cumplimiento de tales medidas sanitarias por parte de la ciudadanía.

En virtud de todo lo expuesto se hace necesario acudir al procedimiento de tramitación de emergencia previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El artículo 120 de la LCSP dispone que podrá utilizarse la tramitación de emergencia “cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional (...)”. En tales casos, como el que se presenta actualmente, se aplicará el régimen excepcional previsto en dicho precepto, que incluye que “el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente (...)”. Y añade que “el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario”.

En línea con lo anterior, desde los Tribunales de Justicia se ha interpretado justificada, por necesaria, la utilización del procedimiento de emergencia cuando, como en este caso, “la situación producida no solo permitía sino que exigía una actuación inmediata” (sentencia 122/2008 de 25 febrero -RJCA 2009\1- del TSJ de Aragón), que requiera “una actuación inmediata que excepcione la licitación”, que se trate de “una situación de “peligro grave” que es el que autoriza la contratación de emergencia” (sentencia núm. 166/2019 de 12 marzo JUR 2019\302987- del TSJ de Cataluña).



La utilización de la vía de emergencia en el contrato de referencia está, por tanto, plenamente justificada en términos de gravedad del riesgo, urgencia y necesidad, notas características que imponen la necesidad de actuar con inmediatez y excluyen la tramitación de un procedimiento de licitación que, incluso por la vía de urgencia, no satisfaría las imperiosas necesidades surgidas con la suficiente celeridad que requiere la situación.

Estas actuaciones se consideran de máxima necesidad para afrontar la actual situación de crisis sanitaria producida por la infección del COVID-19, y el no realizarlas a tiempo representaría un grave peligro para la salud de los ciudadanos.

Objeto del contrato y descripción de las principales tareas a realizar por la contratista:

El objeto del contrato es la prestación de los servicios de asistencia técnica y colaboración material e informática en apoyo de la gestión del procedimiento sancionador de aquellas denuncias por incumplimientos de la normativa sanitaria frente al COVID-19 y que han sido impuestas por diferentes agentes de la autoridad con competencias para tal fin.

Incluye la realización de aquellos trabajos de colaboración que no impliquen ejercicio de autoridad ni menoscabo de funciones reservadas a funcionarios públicos, ni custodia de fondos públicos, en orden a conseguir la máxima eficacia en el procedimiento sancionador y en la recaudación de las sanciones impuestas, como el apoyo en la clasificación y grabación de las denuncias provenientes de otras Administraciones y de los distintos cuerpos policiales o de inspección, así como el apoyo en la gestión de expedientes sancionadores que de las mismas se deriven mediante la realización de procesos informáticos encaminados a la interconexión de información, grabación y emisión de dichos expedientes.

También se incluye la colaboración en la gestión de recaudación de las sanciones consistente fundamentalmente en la realización de las gestiones, actividades, trámites, control de notificaciones y diligencias que, junto con la cumplimentación de tareas meramente formales que, no implicando ejercicio de autoridad pública ni menoscabo de funciones reservadas a funcionarios públicos, favorezcan la recaudación en vía voluntaria de los recursos generados en la tramitación de estos expedientes sancionadores.

La Dirección General de Salud Pública, como órgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora en la materia, y la Secretaría General Técnica, como órgano encargado de la tramitación de los expedientes sancionadores, ostentan respecto del servicio contratado todas las potestades que tenga atribuidas por la legislación aplicable sobre la materia y entre ellas:

1. Regular la prestación del servicio y las relaciones de los usuarios con el adjudicatario y sus derechos y obligaciones con el servicio.
2. Fiscalizar las gestiones del adjudicatario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus instalaciones, locales y dictar las órdenes e instrucciones que considere convenientes para mantener o restablecer la debida prestación.



3. Exigir la rectificación de las facturas que no se adecuen a los requisitos exigidos por la normativa fiscal.
4. Definir el contenido, la estructura y la forma de los impresos normalizados necesarios para la tramitación, emisión y notificación de los servicios objeto del contrato, así como la estructura y la forma de los documentos necesarios para la publicación edictal en los boletines oficiales y en los tabloneros de los ayuntamientos respectivos. Los costes derivados de la impresión y ensofrado de estos impresos utilizados en la ejecución del contrato, así como el resto del material fungible de oficina y demás accesorios de carácter burocrático, serán por cuenta y cargo de la adjudicataria.
5. Definir la forma de realizar las notificaciones, tanto individuales como colectivas y el lugar y la forma en que deben realizarse los ingresos.
6. Conceder la autorización expresa para la anulación de un expediente sancionador.
7. La revocación de liquidaciones y la consiguiente devolución de ingresos indebidos, en su caso, derivadas de errores en el procedimiento sancionador.
8. La realización de todas aquellas funciones reservadas legalmente a funcionario público y que impliquen ejercicio de autoridad.
9. Las labores de dirección y coordinación necesarias para la correcta prestación de los servicios.

Obligaciones y tareas a desarrollar por la adjudicataria:

- Clasificación de las denuncias: Recepción de las denuncias y clasificación de las mismas de acuerdo con los criterios indicados por la Dirección General de Salud Pública, devolviendo aquellas que sean de imposible tramitación por ausencia de datos.
- Mecanización y grabación de los datos de las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad. Estos trabajos se ejecutarán a través de terminales de la entidad adjudicataria, con base en la relación que deberá ser facilitada por la Dirección General de Salud Pública junto con los justificantes de las denuncias practicadas.
- Escaneo de los boletines de denuncia y demás documentación generada y anexo al expediente generado con cada denuncia.
- Emisión de listados para control de las denuncias grabadas que serán entregados a la Administración contratante para su conocimiento, control y conformidad.



- Emisión material del documento de inicio del expediente sancionador derivado de la denuncia para su envío al departamento competente en materia de instrucción.
- Una vez recibido el documento de inicio validado y firmado por el órgano competente (titular de la Dirección General de Salud Pública) se llevará a cabo la gestión de su notificación al interesado a través del Servicio de Correos.
- Control y seguimiento del resultado de las notificaciones, grabación de los resultados de la notificación y escaneo de los acuses de recibo, procediendo en el caso de resultar desconocidos a la investigación de domicilios alternativos y reiteración de la notificación.
- Publicación en el Boletín Oficial del Estado de aquellos actos de expedientes cuyos interesados finalmente hayan resultado ausentes o desconocidos.
- Control de los ingresos realizados en esta fase del procedimiento con el fin de archivar los expedientes que hayan sido abonados por los interesados.
- Apoyo en la recepción y tratamiento de los escritos de alegaciones presentados por los interesados, que se remitirán junto con las actuaciones al órgano competente para su oportuna contestación, la cual será notificada al interesado o a su representante legal.
- Emisión material del documento de resolución sancionadora para su traslado al órgano competente para resolver.
- Notificación de la resolución sancionadora una vez dictada por el órgano responsable, y grabación de los resultados de la notificación y escaneo de los acuses de recibo.
- Publicación en el Boletín Oficial del Estado de aquellos actos de expedientes cuyos interesados finalmente hayan resultado ausentes o desconocidos.
- Asistencia al órgano competente en las propuestas de contestación a los recursos de alzada presentados en tiempo y forma por los interesados que junto con el expediente administrativo se remitirá al órgano competente para su valoración y firma, y tras la cual será notificada al interesado o a su representante legal.
- Control de ingresos. Transcurrido el período para el ingreso voluntario de la sanción sin que éste se efectúe, se procederá a la emisión de la relación comprensiva de las sanciones que han adquirido firmeza y no han sido abonadas.
- La adjudicataria realizará todas las notificaciones o, en su caso, las publicaciones relativas a la tramitación de los procedimientos sancionadores objeto del contrato.

En ningún caso la realización de las prestaciones mencionadas implicará el ejercicio de autoridad por parte del adjudicatario ni el menoscabo de las funciones asignadas al personal funcionario de la Administración contratante.



La gestión que realice la empresa adjudicataria estará sometida al control e inspección que establezca la Dirección General de Salud Pública como órgano competente para ejercer la competencia sancionadora y como órgano para la gestión recaudatoria en periodo voluntario de los ingresos de derecho público que deriven de los expedientes sancionadores en la materia.

Los ingresos procedentes de los procedimientos sancionadores se realizarán en la cuenta restringida de titularidad de la Dirección General de Salud Pública que al efecto se designe, sin perjuicio de que, en un momento determinado, se decida el cambio de la citada cuenta, debiendo ser notificada con antelación suficiente a la empresa adjudicataria. En ningún caso podrán existir cuentas para el ingreso de dichos cobros con titularidad distinta a la de la Dirección General de Salud Pública.

Los ingresos se formalizarán con periodicidad mensual a través de factura de aplicación, y con desglose de todos los conceptos de ingreso que fueran materializados, tanto en soporte documental como informático en formato normalizado, de manera que pueda realizarse el traspaso de forma inmediata a la contabilidad de la Comunidad de Madrid.

Características técnicas del servicio:

El servicio se prestará de lunes a viernes laborables a jornada laboral completa y en exclusiva, a través de los recursos humanos que serán aportados por la adjudicataria.

- **Medios humanos:**

La empresa adjudicataria aportará el personal necesario para la ejecución de este contrato con arreglo a la normativa laboral de aplicación debiendo estar al corriente de sus pagos a la Seguridad Social y a sus empleados, pudiendo ser requerida por la Administración contratante, en cualquier momento, a lo largo de la ejecución del contrato, para comprobar tal extremo.

El personal de la empresa adjudicataria no tendrá relación jurídica, laboral, ni de otra índole, ni generará derechos frente a la Comunidad de Madrid, debiendo constar tal circunstancia en los correspondientes contratos. En este sentido, el personal que la adjudicataria adscriba a la prestación del presente servicio tendrá dependencia laboral de la misma sin que, por ninguna causa, incluso la de despido, pueda pasar dicho personal a depender de la Comunidad de Madrid, no interviniendo esta Administración bajo ninguna forma en las relaciones laborales que existan entre el adjudicatario y su personal.

La empresa presentará copia de los contratos y comunicará a la Dirección General de Salud Pública y a la Secretaría General Técnica de Sanidad la identidad de los trabajadores de su plantilla para que puedan ser dotados, en su caso, de una credencial como personal dependiente de la empresa adjudicataria en su calidad de empresa colaboradora en servicios de asistencia en la gestión administrativa.



El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de contratación laboral, seguridad e higiene en el trabajo, cuyo incumplimiento no implicará responsabilidad de la administración frente al personal contratado por aquel para la prestación del servicio.

La empresa está obligada a dotar a su personal de la formación administrativa e informática necesaria para el correcto desarrollo del servicio, debiendo para las actuaciones que consistan en emisión de informes jurídicos, contar con personal cualificado y con la titulación exigida al efecto.

El servicio de apoyo administrativo deberá contar con:

- Una persona, con titulación de Licenciado/Grado en Derecho, que ejerza funciones de coordinación, gerencia y enlace con la Dirección General de Salud Pública y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad.
- Cinco personas con titulación de Licenciado/Grado en Derecho.
- Ocho administrativos o auxiliares administrativos.

En función de la carga de trabajo que derive de la ejecución del contrato la adjudicataria asignará más recursos humanos en caso de ser necesario.

La adjudicataria está obligada a dotar a su personal de la formación administrativa e informática necesaria para el correcto desarrollo del servicio, debiendo contar con personal cualificado y con la titulación exigida al efecto.

La adjudicataria designará un responsable de la empresa que será el interlocutor ante la Comunidad Autónoma de Madrid en todos los aspectos e incidencias que se planteen.

Deberá tener competencia suficiente para:

- Ostentar la representación de la empresa adjudicataria cuando sea necesaria su actuación o presencia, según el presente pliego, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha del servicio.
- Organizar la ejecución del servicio, así como el cumplimiento de las órdenes recibidas de los órganos competentes de la Consejería de Sanidad.

El personal de la empresa adjudicataria no generará derechos frente a la Comunidad de Madrid ni ostentará vínculo laboral alguno con ésta de conformidad con el artículo 308.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.



El personal adscrito al servicio desde el inicio del contrato deberá permanecer durante la vigencia de este, salvo sustitución por otro personal que cuente exactamente con la misma experiencia debidamente acreditada y nivel de titulación. Lo contrario será causa de resolución del contrato por culpa imputable al contratista.

- **Medios materiales aportados por la adjudicataria:**

- Medios informáticos:

- Hardware:

Los equipos informáticos (PC, impresora, escáner, etc.) necesarios para la realización de las actividades establecidas serán a cargo de la empresa adjudicataria, la cual será la encargada de instalar estos.

Asimismo, correrá por cuenta de la empresa el establecimiento y mantenimiento de las líneas necesarias para la interconexión de los terminales remotos con el ordenador central del servicio.

Los ordenadores que utilice la empresa, que se vayan a conectar con el Sistema de Información de la Comunidad de Madrid, deberán ser compatibles con dicho sistema y cumplir con los requisitos técnicos que se indiquen desde el Ente Público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

Dichos medios consistirán inicialmente en:

- CPD en la nube con certificación ISO 9001, ISO 27011:2014 y ENS (Esquema Nacional de Seguridad).
 - 14 ordenadores personales.
 - 6 impresoras de mesa.
 - 2 impresoras multifunción.
 - 4 escáneres.
 - 6 Lectores de códigos de barras.

- Software:

La adjudicataria desarrollará el servicio con software o licencia de su propiedad (WINGT de AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A.), observando lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos.



La aplicación cuenta con las certificaciones (ISO 9001:2015; ISO 27001:2013, ISO 14001:2015, ENS –Esquema Nacional de Seguridad- y ENI –Esquema Nacional de Interoperabilidad).

Deberá contemplar la opción de Multi-organismo permitiendo clasificar cada expediente y actuación del procedimiento en función de su origen de procedencia.

La empresa adjudicataria será la responsable de disponer los medios para la conexión telemática con el sistema de información de la Comunidad de Madrid, que, a través de sus técnicos, definirá los permisos de acceso que los empleados de la empresa adjudicataria deban disponer.

Las modificaciones o mejoras que la empresa adjudicataria proponga serán a cargo de esta, y previo consentimiento y visto bueno de los técnicos de servicio. Así mismo, la empresa adjudicataria se hará cargo de las adaptaciones en el software que fueran obligadas para el cumplimiento de los cambios legales que se pudieran producir en el ámbito de la tramitación de los expedientes.

Las bases de datos de uso de la adjudicataria se ubicarán en sus ordenadores centrales, siendo ésta la responsable del mantenimiento del CPD, actualizaciones, copias de seguridad, etc.

- Redes y comunicaciones: La adjudicataria establecerá las redes de voz y datos necesarias para la prestación del servicio.

- **Lugar de prestación del servicio, mobiliario y suministros:**

La empresa adjudicataria aportará, en condiciones de idoneidad y accesibilidad, un local en el que se prestarán y desarrollarán los servicios de asistencia y colaboración que son objeto de este contrato.

Dicho local, debidamente habilitado con un mínimo de 200 metros cuadrados, se dotará con mobiliario, material y equipos informáticos, así como de los suministros de agua, luz y teléfono con línea para uso informático y telemático.

Todas estas dotaciones, así como las necesarias para su mantenimiento serán de cuenta y cargo de la empresa adjudicataria.

- **Impresos oficiales para la prestación del servicio:**

Los órganos competentes de la Consejería de Sanidad determinarán los impresos oficiales a utilizar.



Una vez definidos su confección será por cuenta de la empresa adjudicataria, emitiendo en todo momento sobre papel en blanco sin formularios preimpresos.

- **Coste de las notificaciones:**

Todas las notificaciones necesarias para la tramitación de los procedimientos que son objeto de contratación serán satisfechas por la Consejería de Sanidad, incluyendo en su caso los posibles costes de publicaciones edictales o similares.

- **Otras obligaciones y protección de datos:**

La empresa adjudicataria tendrá el carácter de empresa contratista de la Comunidad de Madrid en la realización de los servicios contratados, con el alcance previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y no tendrá, en ningún caso, el carácter de Órgano de Gestión de la Comunidad Autónoma de Madrid no dependerá orgánicamente de él, ni estará incardinada en su estructura administrativa.

La adjudicataria se comprometerá a mantener en todo momento un riguroso control de cuantos datos en información acceda o conozca, como consecuencia de las actividades derivadas del presente contrato, garantizando la necesaria confidencialidad de los mismos, el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos de carácter personal y en concreto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de protección de datos), así como a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan Medidas urgentes de Servicio Público, en materia de Administración Digital, Contratación del Sector Público y Telecomunicaciones, y a no hacer difusión ni ninguna utilización de los mismos.

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid será la propietaria de toda la información y de los resultados obtenidos a resultados del presente contrato y los podrá explotar libremente bajo su entera responsabilidad.

En el caso de que se produjera una utilización anormal o negligente por parte de la empresa adjudicataria o se violara la confidencialidad requerida por la Consejería de sanidad, se adoptarían medidas legales (administrativas, penales) correspondientes.

El plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter confidencial de la información es de 5 años.

Para acreditar dicho compromiso, previamente al comienzo de la ejecución, la adjudicataria, en su calidad de encargado del tratamiento de datos, deberá recabar la aceptación informada de todo el personal asignado al servicio, mediante la firma de un



compromiso individual de confidencialidad y secreto, remitiendo los documentos así firmados a la Dirección General de Salud Pública.

A la finalización del contrato todos los Registros y la documentación generada durante su vigencia serán devueltos a la Comunidad de Madrid en la forma, soporte y mediante el proceso informático y material que ésta determine.

La empresa adjudicataria deberá contar con un registro de entradas y salidas de soportes y de incidencias, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Los documentos y soportes informáticos que manipule y confeccione la empresa adjudicataria de los trabajos serán propiedad la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid quien será la titular de toda la información contenida en los ficheros, archivos y registros informáticos que obren en poder de la empresa adjudicataria relacionados con los datos obtenidos necesarios para el desarrollo de los servicios objeto del contrato.

• **Prestación de asistencia y propiedad de la información.**

Con independencia de la información que obtenga la empresa adjudicataria, la Consejería de Sanidad facilitará toda la información que sea precisa, de la que disponga o tenga acceso, para la mejor prestación del servicio.

El contenido de la información y cuantos documentos integren los expedientes individuales o colectivos abiertos, será custodiado por la empresa adjudicataria y para su uso exclusivo, de acuerdo con el contenido y objeto del contrato.

Esta información, contenida en ficheros informáticos o documentales, es propiedad exclusiva y en su totalidad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y sólo podrá ser utilizada por el adjudicatario para el ejercicio de las funciones objeto del presente contrato, y deberá estar radicada, para su manejo y custodia, exclusivamente en las dependencias expresamente autorizadas.

Plazo de ejecución:

Seis meses a contar desde el 5 de abril de 2021.

De acuerdo con todo lo anterior, con el fin de dar comienzo lo antes posible a los servicios que integran el objeto de este contrato en el actual estado de crisis sanitaria, y siguiendo las orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública en la situación de crisis relacionada con la crisis del COVID-19 de fecha 1 de abril de 2020, así como el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, se propone la tramitación de emergencia para este contrato a los efectos previstos en el artículo 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regulador de la tramitación de emergencia.



La utilización de cualquier otro de los procedimientos previstos por la LCSP, incluyendo el procedimiento de urgencia regulado en su artículo 119, no permite iniciar la ejecución del contrato en el plazo necesario para lograr su finalidad, poniendo en riesgo la consecución de los objetivos que se persiguen con la rápida corrección de los incumplimientos de las medidas sanitarias de prevención del COVID-19 y con ello la salud de la población.

Por tratarse, por tanto, de una emergencia de carácter inaplazable, se han transmitido los requisitos técnicos antes descritos y solicitado un único presupuesto para el servicio de colaboración y asistencia técnica para el apoyo en la gestión de la tramitación de denuncias y procedimientos sancionadores por incumplimientos de la normativa sanitaria de prevención frente al COVID (CPV 75130000-6 "Servicios de apoyo a los poderes públicos"), a la mercantil SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L.U., con NIF B96067400 y domicilio en Paseo de la Alameda nº 34, 7º A, de Valencia (CP 46023).

La citada mercantil tiene experiencia en el desarrollo de tareas de apoyo a la gestión de expedientes sancionadores en varios municipios (Ciudad Real, Castellón de la Plana, Vigo, Bilbao, Guadalajara, Cuenca, Santiago de Compostela, Puertollano...).

También ha resultado adjudicataria del Lote 1 (Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León) del Acuerdo Marco promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de su Central de Contratación, para la prestación de los Servicios de recaudación ejecutiva de ingresos de derecho público y multas de tráfico.

Además, la referida sociedad dispone de las siguientes certificaciones:

- ISO 9001:2015.
- ISO 27001:2013.
- ISO 14001:2015.
- ENS –Esquema Nacional de Seguridad-

Por tanto, la citada entidad reúne las condiciones técnicas necesarias para la prestación del servicio objeto del contrato con garantías de calidad, incluyendo los medios personales, materiales y organizativos.

Régimen de pagos:

La adjudicataria percibirá por la prestación del servicio un precio fijo de 16 euros + IVA (21 %) por expediente gestionado.



Se establece un componente variable en función de la recaudación efectivamente obtenida de un 15% + IVA (21%) de la cantidad liquidada y cobrada en cada expediente dentro del periodo voluntario de ingreso.

Se realizarán pagos mensuales liquidando las retribuciones correspondientes al mes natural vencido por los conceptos mencionados, en virtud del documento expedido por la Dirección General de Salud Pública que acredite la conformidad del servicio prestado con la factura presentada por el proveedor.

A tal fin deberá presentarse por la adjudicataria una relación de los trabajos de colaboración realizados anexándose a la factura electrónica que se presente en el portal FACE.

Conforme a dicho sistema de retribución el importe máximo estimado del gasto asciende a 582.252,00 euros IVA incluido (481.200,00 euros sin IVA), calculado en base a un volumen máximo de gestión de 24.000 expedientes durante los seis meses de ejecución del contrato (la parte variable se calcula a partir de una estimación de recaudación efectiva en periodo de ingreso voluntario del 27% de los expedientes gestionados con una media de 100 euros por sanción), que se tramitará con cargo a la posición presupuestaria G/313B/22706, proyecto de gasto 2020/000164 CORONAVIRUS, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

El importe de la distribución por anualidades es el siguiente:

2021: 582.252,00 euros IVA incluido (481.200,00 euros sin IVA).

En Madrid, a fecha de firma

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Firmado digitalmente por: ANDRADAS ARAGONÉS ELENA
Fecha: 2021 03 19 18:30

Elena Andradás Aragonés

